


RV: 2023-1203 DE JOSÉ ANTONIO QUIROGA SUAREZ - SUBSANA DEMANDA Y RENUNCIA A LOS DEMÁS TÉRMINOS PARA QUE POR FAVOR SE INGRESE EL PROCESO AL DESPACHO LO MÁS PRONTO POSIBLE PARA SU CALIFICACIÓN FINAL

Pedro Luis Ospina Sanchez <pedroluisospina@outlook.com>

Mar 14/11/2023 4:53 PM

Para: Juzgado 32 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (7 MB)

2023-1203 DE JOSÉ ANTONIO QUIROGA SUAREZ - SUBSANA DEMANDA.pdf;

Doctora

NANCY CRISTINA GUERRERO CASALLAS

HONORABLE JUEZA TREINTA Y DOS (32) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, D.C.

E.

S.

D.

REF.-. DECLARATIVO DE MENOR CUANTÍA POR RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 2023 - 01203 - 00

-

DEMANDANTE JOSÉ ANTONIO QUIROGA SUÁREZ

LITISCONSORTE NECESARIO DEL EXTREMO ACTOR

BBVA COLOMBIA S.A.

DEMANDADA

BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

Cordial y respetuosamente se dirige ante su señoría, **PEDRO LUIS OSPINA SÁNCHEZ**, obrando en mi reconocida calidad de **APODERADO JUDICIAL DEL EXTREMO ACTOR**, para allegarle memorial a través del cual procedo dentro de la oportunidad procesal para el efecto a **SUBSANAR LA DEMANDA**, atendiendo los gentiles requerimientos impartidos a través del auto proferido el **09 DE NOVIEMBRE DE 2023**, notificado en el **estado electrónico No. 108** del **10 Hogaño**.

Con el fin que se entre con carácter urgente el expediente a su Honorable Despacho para calificar la demanda, con todo respeto y cordialidad le manifiesto a su señoría que, renuncio a los demás términos para la subsanación.

De la Honorable Jueza de la República de Colombia, con todo mi respeto y admiración,

PEDRO LUIS OSPINA SÁNCHEZ

c.c. 79.148.652 expedida en Bogotá

T.P. 151.378 del C.S. de la J.



Defender Asegurados S.A.S.

Carrera 13A No. 34-55 Of. 403 y 404 Edificio Qualita III

Tels.: (601)323 2647/49/50 - Celular: 310 214 3315

E-mail: defenderasegurados@outlook.com

pedroluisospina@outlook.com

www.defenderasegurados.com - Bogotá D.C., Colombia

DEMANDAS CONTRA COMPAÑÍAS DE SEGUROS POR EL NO PAGO DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS DE LOS RAMOS DE GENERALES, TÉCNICOS Y DE VIDA

Doctora

NANCY CRISTINA GUERRERO CASALLAS

HONORABLE JUEZA TREINTA Y DOS (32) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, D.C.

E.

S.

D.

REF.-. DECLARATIVO DE MENOR CUANTÍA POR RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 2023 - 01203 - 00

DEMANDANTE JOSÉ ANTONIO QUIROGA SUÁREZ

LITISCONSORTE NECESARIO DEL EXTREMO ACTOR

BBVA COLOMBIA S.A.

DEMANDADA BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

Cordial y respetuosamente se dirige ante su señoría, PEDRO LUIS OSPINA SÁNCHEZ, mayor de edad, residenciado y domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 79.148.652 expedida en Bogotá, ABOGADO EN EJERCICIO, dignatario de la Tarjeta Profesional 151.378 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi reconocida calidad de APODERADO JUDICIAL DEL EXTREMO ACTOR, para proceder dentro de la oportunidad procesal para el efecto a SUBSANAR LA DEMANDA, atendiendo los gentiles requerimientos impartidos a través del auto proferido el 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, notificado en el estado electrónico No. 108 del 10 Hogaño, laborío que cumplo en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES DE LA PROVIDENCIA

Mediante proveído notificado el 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 se pospone la calificación del libelo genitor de la demanda, exigiendo so pena de rechazo el cumplimiento de los siguientes requerimientos, a saber:

“1.1 AJUSTE las pretensiones denominadas condenatoria subsidiaria de tal manera que encuentren fundamento en los hechos de la demanda (numeral 5 artículo 82 del C.G.P.)

1.2. APORTE el contrato del que emana la responsabilidad reclamada.

1.3. AJUSTE las pretensiones de la demanda de tal manera que desaparezca la indebida acumulación (artículo 88 numeral 2 C.G del P). Y que se muestren acorde con la acción que demanda, esto es, resolución de contrato.

¡ CON HONESTIDAD Y CUMPLIMIENTO MARCAMOS LA DIFERENCIA !

3. **INTEGRAR** la demanda en un solo escrito con la subsanación y recuérdese que los anexos hacen parte integral de la misma. (...).

CUESTIÓN PREVIA

A propósito de la inadmisión de la demanda, es imperativo en orden a su subsanación, señalar con precisión por parte del juez los defectos de que ésta adolezca, siempre que estos se acompasen a las restringidas causales de inadmisión que orientan la formalidad de la demanda, en tanto **la exigencia de requisitos no establecidos en la ley o la exacerbación de los mismos, representa un EXCESO RITUAL MANIFIESTO que afecta, lesiona y restringe la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y el DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

En este sentido y en procura de **GARANTIZAR EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**, el legislador delimitó de manera funcional unas competencias para el **CONTROL FORMAL DE LA DEMANDA**, en **SIETE (7) CAUSALES** o tópicos descritos con claridad y suficiencia en el **Párrafo 3 del Artículo 90 del C.G.P.**, toda vez que la expresión legislativa vino acompañada de la disposición gramatical **"solo en los siguientes casos"**, a través de la cual quiso introducir los **PRINCIPIOS DE RESERVA Y TAXATIVIDAD**.

Ahora bien, el **DECRETO 806 DE 2020 <ahora LEY 2213 DE 2022>** señero por implementar las Tecnologías de la información y de la comunicación al proceso judicial puso en marcha otros tantos requisitos formales para la demanda digital, entre ellos, el establecido en el **Artículo 6 ibídem**, el cual implementó 3 cambios en punto a la presentación de la demanda, en cuanto: (i) prescribe que la demanda y sus anexos se presentaran mediante mensaje de datos, (ii) elimina la obligación de presentar copias físicas o electrónicas de la demanda y sus anexos y, (iii) previó 2 deberes procesales en cabeza del demandante, cuyo incumplimiento da lugar a la inadmisión de la demanda, entre los cuales, se exigió indicar el canal digital donde deben ser notificados las partes, sus representantes, apoderados y testigos, y el referido al envío de la copia de la demanda y sus anexos a la demandada por correo electrónico de manera simultánea al acto de radicación o presentación de la demanda, reproduciendo tal deber en el evento de inadmisión, exigiendo remitir de manera simultánea el escrito contentivo de la subsanación de la demanda al demandado.

Por lo atrás señalado, aun cuando las exigencias impartidas en los **NUMERALES 1.1 Y 1.3** siguen el principio de **TAXATIVIDAD** en punto a los **REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA**, que contempla el **Artículo 82 de la obra procesal**, sus fundamentos exacerban las causales de inadmisión, pues parten de una **INDEBIDA VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL LIBELO CABEZA DEL PROCESO**, con todo y lo que ello

representa, al señalar que el ajuste de las pretensiones, para efectos de evitar su indebida acumulación, debe tener en consideración que la acción sustancial reclamada trata de una resolución del contrato, cuando en verdad, nos encontramos ante una acción de responsabilidad civil contractual.

De esta manera, la calificación de los requisitos formales, con todo respeto, no puede pretender variar el contenido objetivo de la pretensión y menos, virar sobre la acción sustancial reclamada, pues en tal sentido el órgano judicial no se constituiría en la ingente labor de interpretar la demanda, sino en la de sustituir o reemplazar la voluntad objetiva del accionante.

De igual modo, es evidente que el legislador estableció unos requisitos mínimos razonables para la admisión de la demanda, los cuales no puede ampliar el director del proceso so pretexto de dar claridad al debate, pues este no se agota en la etapa de calificación, desconociendo el núcleo esencial del derecho fundamental de **ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**, al impedir la continuidad del procedimiento y su normal desenvolvimiento, tal como se presenta en el requerimiento del **NUMERAL 1.2**, en cuanto se exige la aportación de elementos probatorios, propios de una etapa posterior a la de calificación formal. Se reitera con todo respeto nuevamente que, al juzgador le es exigido la adopción de decisiones con sujeción a los procedimientos establecidos, lo que implica respetar al máximo **EL DEBIDO PROCESO** y **EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**, a la cual se ingresa con el cumplimiento de los **REQUISITOS FORMALES MÍNIMOS, RAZONABLES Y TAXATIVOS** establecidos en el **párrafo 3 del Artículo 90 del C.G.P.**

En su momento, la **Honorable Corte Constitucional** en ejercicio del control abstracto de las normas, estableció la intelección normativa y el fundamento de las causales de inadmisión, contemplando que¹:

“(...) la Corte se aparta del concepto emitido por el demandante, por cuanto la interpretación que se le da al artículo acusado, en ningún momento desconoce los derechos constitucionales de quien acude a un estrado judicial, tampoco puede decirse que el juez que tiene a su conocimiento la demanda, puede inadmitirla bajo criterios puramente subjetivos, pues las causales de inadmisión son taxativas, se encuentran específicamente señaladas en el precepto demandado y no le es posible a un juez inadmitir una demanda, sin que el auto que ordena la inadmisión sea debidamente fundamentado, tan es así que fue el propio legislador quien en su obligación de ejecutar el mandato social, contenido en la Constitución, estableció

¹ C-833 de 2002, Corte Constitucional.

para los funcionarios judiciales el deber de respetar, garantizar y salvaguardar los derechos de quienes intervienen en el proceso. (...)

Dentro de este contexto, se señala que corresponde a la noción del **DEBIDO PROCESO** el que las decisiones judiciales se adopten con arreglo y sometimiento absoluto a los procedimientos previamente establecidos por el legislador.

En tal sentido, la **Honorable Corte Constitucional** ha indicado que:

“(...) El proceso es una institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud, el proceso se proyecta y desenvuelve en el tiempo, a través de la sucesión de una serie de actos o de etapas dirigidas a una finalidad, cual es la constatación de una situación jurídica en un caso concreto mediante una sentencia. El proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre su finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia.

En función del tiempo no sólo se crean y modifican los derechos procesales concretos, sino que también se los extingue, por lo cual se hace necesario que la ley procesal establezca unos plazos o términos, con el fin de que el proceso se realice dentro de una secuencia lógica ordenada y con la oportunidad y celeridad que de conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política demanda el ejercicio de la función de administrar justicia. Aunque es de anotar, que los principios de eficacia y celeridad que informan el proceso judicial y que se infieren de los preceptos aludidos, igualmente tienen su fundamento en el artículo 209 de la Carta Política, pues los postulados rectores de la función administrativa también tienen operancia en el desarrollo de la función jurisdiccional, como manifestaciones que son del poder del Estado. (...)

Por consiguiente el acto de postulación, a través del cual se impetra la presente acción judicial ante el Estado, con todo respeto y cordialidad, manifiesto que cumple con los requisitos formales de la demanda, ya que los defectos que han sido señalados no se estructuran; no existe ambigüedad en la demanda; y los anexos obligatorios de la demanda fueron allegados junto con el escrito fundador de la presente acción.

No obstante lo expuesto, me permito aclarar cada motivo de inadmisión en los términos siguientes.

PRIMER REQUERIMIENTO - (1.1)

Bajo dicha perspectiva, sin que ello altere el núcleo esencial de los hechos contenidos en la demanda, me permito precisar que la **PRETENSIÓN CONDENATORIA SUBSIDIARIA** encuentra fundamento en los **Artículos 1142 y 1144 del Código de Comercio**, así como en la naturaleza del **CONTRATO DE SEGURO DE VIDA** objeto de la **ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONCRETA**. De igual manera, los supuestos fácticos de la norma cuyo efecto jurídico persigue la pretensión que se exigió ajustar, se recogieron en los **HECHOS CUARTO, SÉPTIMO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO OCTAVO**, los cuales, analizados en conjunto, establecen la condición que de **BENEFICIARIO GRATUITO** tiene **EL ASEGURADO** respecto al **VALOR EN EXCESO DEL MONTO NO PAGADO DE LA DEUDA**, la cual constituye el interés del ente prestamista, en cuyo caso de solución de su acreencia depondría su interés en la prestación económica del seguro, lo que provoca el **ACRECIMIENTO EN FAVOR DEL ASEGURADO**, quien bajo la naturaleza del seguro se constituyó en **BENEFICIARIO GRATUITO CONCURRENTE**, más aún cuando el valor asegurado se fijó en una suma constante que no se marchita con ocasión a los abonos realizados al crédito desembolsado por la entidad financiera.

De esta suerte las cosas, teniendo en cuenta que el requerimiento se impone al abrigo del **Numeral 5 del Artículo 82 del Código General del Proceso**, surge evidente que la **PRETENSIÓN CONDENATORIA SUBSIDIARIA** encuentra fundamento en los hechos recogidos en la demanda, los cuales fueron debidamente determinados, clasificados y numerados, cumpliendo así con la formalidad exigida para calificar la demanda.

Ahora bien, la pretensión cumple las características distintivas de **CLARIDAD Y PRECISIÓN**, al punto que la **CONDENATORIA SUBSIDIARIA** se alimenta de las **DECLARATIVAS PRINCIPALES**, razón por la que no requirió servirse de **PRETENSIONES DECLARATIVAS AUTÓNOMAS SUBSIDIARIAS**, puesto que dicha pretensión no goza de autonomía, en tanto como bien se advirtió, quedó condicionada a que *"para la fecha de proferirse la sentencia de fondo, se haya extinguido por cualquier causa la OBLIGACIÓN No. 00130158009617961493"*.

En esos contornos, teniendo en cuenta que **EL DEMANDANTE** y obviamente, **ASEGURADO DENTRO DEL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA DEUDORES**, sin hesitación alguna al respecto, ostenta un **INTERÉS ACTUAL, REAL Y LÍCITO**, en que se procure la solución del crédito del cual es titular, lo que de suyo impacta el pasivo de su patrimonio, circunstancia que constituye su legitimación, en todo caso, por las particularidades de este tipo de seguro, aquél puede **RECLAMAR EL VALOR QUE EXCEDA AL SALDO INSOLUTO**

DE LA OBLIGACIÓN Y EL VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO DE SEGURO. Así que, de llegar a menguar el valor de la suma adeudada a la entidad financiera o de extinguirse por la vía del pago, o de cualquier modo de extinción de las obligaciones, el interés en el cumplimiento de la prestación se recoge en el patrimonio exclusivo del **DEMANDANTE**, en su condición de **BENEFICIARIO CONCURRENTES**, en tanto que, para la entidad financiera en dicho evento, habrá cesado su interés.

Incluso, en tratándose de obligaciones autónomas e independientes, la suerte del crédito en nada impacta la prestación asegurada a cargo de la compañía de seguros, pues mientras la primera se marchita con ocasión a los abonos totales o parciales de la deuda, **EL VALOR ASEGURADO EN EL CONTRATO DE SEGURO** se mantiene en todo su esplendor, máxime cuando, primeramente, su **VALOR ASEGURADO** se ha pactado bajo **MODALIDAD CONSTANTE O ESTIMADA**, y a su turno, en tanto que, tratándose de **SEGUROS DE VIDA DEUDORES**, el acreedor no podrá recibir prestación que supere el monto de su interés (crédito), por expresa prohibición de los Artículos 1144 del Código de Comercio y Artículo 120 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (DECRETO 663 DE 1993) al prever que "en los seguros de vida del deudor el valor asegurado no excederá el del saldo insoluto del crédito". Ello, en lo fundamental, coincide con lo previsto en la **RESOLUCIÓN 2735 DE 1990** y en la **CIRCULAR EXTERNA 037** del mismo año, dictadas por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, sin que se limite la libertad negocial para fijar o acordar el **VALOR ASEGURADO**, dentro de los límites del bien común, con la única limitación que la indemnización a favor del acreedor (TOMADOR Y BENEFICIARIO ONEROSO) no exceda al saldo insoluto de la deuda.

Allí que dicha aclaración no tiene la virtualidad de modificar o alterar el contenido objetivo del libelo de la demanda, y además, no se advierte oscuridad o imprecisión sobre las pretensiones reclamadas, al ser acumuladas atendiendo las reglas del **Artículo 88 del Código General del Proceso**, sirviéndose de unos mismos hechos para su fundamentación, los cuales fueron señalados de manera clara y precisa.

Defender Asegurados S.A.S.

ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DE SEGUROS

SEGUNDO REQUERIMIENTO - (1.2)

Los poderes de ordenación, en particular aquel que habilita al juez para impartir órdenes a las partes en procura de obtener aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten, con todo respeto nuevamente, no puede ejercerse de manera indiscriminada y menos en la etapa de calificación de la demanda, precisamente por cuanto prevalece **EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD** y de **TUTELA JUDICIAL EFECTIVA**, de allí que pueda ser ejercido en momentos posteriores a la habilitación o ingreso de la acción. En ese sentido, el requerimiento estaría al margen de los límites de los poderes de ordenación en cabeza del juzgador.

Bajo ese contexto, el requerimiento de exigir la aportación del **CONTRATO DE SEGURO**, para efectos de identificar la fuente de la responsabilidad reclamada, atiende más a la demostración de los sustentos de las pretensiones en orden a probar el primer elemento de la responsabilidad, **EL CONTRATO, su EXTENSIÓN, COBERTURAS Y VALORES ASEGURADOS, que a la formalidad de la demanda**; por lo que tal asunto no puede servir como fundamento para inadmitirla, máxime cuando por muy gravoso que parezca para la **ECONOMÍA PROCESAL**, en nuestra legislación colombiana se procura salvaguardar la **GARANTÍA JUDICIAL DE ACCESO A LA JUSTICIA** y a la definición de fondo de las súplicas postuladas como contenido del **DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA** por encima de **PRINCIPIOS PROCESALES**.

Destáquese que el tratamiento del **CONTRATO DE SEGURO** ha variado a lo largo del tiempo, desde una solemnidad estricta a un tratamiento más laxo evidenciado por la consensualidad del mismo. De igual manera, se eliminó esa suerte de tarifa legal para acreditar la existencia del **CONTRATO DE SEGURO, sus COBERTURAS, CONDICIONES Y VALORES ASEGURADOS**, por manera que, exigir un principio de prueba única en punto a su acreditación, no solo desconoce la entronización del **Artículo 1 de la LEY 389 DE 1997**, sino que pone en vilo caros principios fundamentales albergados en el **ESTATUTO DEL CONSUMIDOR**, que predice como práctica abusiva en desmedro de los derechos del consumidor, imponer prueba tarifada para la acreditación de sus derechos.

De allí no es indiferente que la inserción de la reforma comentada tuvo como fenómeno social la mala práctica que un sector de la economía aseguradora asumió frente a la ejecución y cumplimiento del seguro como contrato solemne; por lo que, de manera pletórica, se permitió para la prueba del contrato de seguro, los demás medios probatorios establecidos en la ley procesal.

De lo hasta aquí discurrido, con todo respeto, se pone en tela de juicio el requerimiento impartido por su señoría, comoquiera que primero no hace parte del catálogo cerrado de causales, estrictamente formales, para inadmitir la demanda, y segundo, impone un medio de prueba tarifado para la acreditación de la vinculación o inclusiones del señor **JOSÉ ANTONIO QUIROGA SUÁREZ** a la **PÓLIZA DE GRUPO DE VIDA DEUDORES No. VGDB 0110043**, tomada por la entidad financiera **BBVA COLOMBIA S.A.** en favor de sus deudores de conformidad con lo establecido en el **Numeral 2.36.2.2.1 del DECRETO 673 DE 2014**.

Es más, el requerimiento pasa inadvertida la **PRUEBA DOCUMENTAL 1.1** incorporada en la demanda, en la que figuran el **CERTIFICADO INDIVIDUAL CON FORMATO DE DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD**, en cuyo contenido se da fe de los **AMPAROS, VALORES ASEGURADOS Y NUMERO DE PÓLIZA**; luego a la fecha no existe

discusión siquiera de parte de la demandada sobre la **EXISTENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE INCLUSIÓN A LA PÓLIZA COLECTIVA O MATRIZ**, ni de sus **VALORES ASEGURADOS Y/O COBERTURAS**. Ahora bien, si se extrañan las **DEFINICIONES DE LAS COBERTURAS Y SU DELIMITACIÓN POSITIVA O NEGATIVA EN CUANTO A RIESGOS Y GARANTÍAS**, obedece su discusión o contradicción a la demandada en las etapas procesales respectivas, máxime si de cara al **párrafo segundo del Artículo 1077 del Código de Comercio** *“el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”*.

Ahora bien, se ha explicado que la parte que tiene en su poder pruebas documentales debe aportarlas preponderantemente con **LA DEMANDA O SU CONTESTACIÓN**, razón de ello fue que motivó la inclusión del **HECHO SEXTO Y DÉCIMO SEXTO**, que en lo relevante afirmaron de manera indefinida que: *“(…) mucho menos, se le entregó copia de los documentos que integran la mentada PÓLIZA DE SEGURO, ni siquiera el CERTIFICADO DE INCLUSIÓN; “Al DEUDOR ASEGURADO señor JOSÉ ANTONIO QUIROGA SUAREZ, jamás le fue entregado una copia, fotocopia u original de los CERTIFICADOS DE INCLUSIÓN a la PÓLIZA DE VIDA GRUPO DEUDORES No. VGDB 0110043, LAS CONDICIONES GENERALES, LAS CONDICIONES PARTICULARES NI LOS CERTIFICADOS DE RENOVACIÓN que rigen el mismo por parte BBVA COLOMBIA S.A. y mucho menos de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.”*, y en coherencia, se solicitó de conformidad con lo establecido en el **Artículo 264 y s.s. del C.G.P.**, la **EXHIBICIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS EN CABEZA DE LA DEMANDADA**, entre ellos, **los CERTIFICADOS INDIVIDUALES DE INCLUSIÓN Y LA PÓLIZA MATRIZ DE GRUPO DE VIDA DEUDORES No. VGDB 0110043**, indicando además los **HECHOS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR, SU CLASE Y RELACIÓN CON EL OBJETO DEL PROCESO**, y denunciando que se encontraban en poder de la Aseguradora demandada.

Con relación a los documentos en poder de la otra parte, advierte el ilustre Doctrinante Doctor **HERNAN FABIO LÓPEZ BLANCO**, que existe otra posibilidad para lograr su aportación, sin necesidad de emplear la acción de exhibición, cual es la prevista en el **Artículo 82 Numeral 6 del C.G.P.**, la cual establece como uno de los requisitos de la demanda *“la petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que éste los aporte”*, situación que guarda armonía con el **Artículo 96 numeral 5 del C.G.P.** que señala que: *“A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscribe a nombre del demandado, la prueba de su existencia y presentación, si a ello hubiere lugar, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante, o la manifestación de que no los tiene, y las pruebas que pretenda hacer valer”*. Así las cosas, no solo en el escrito inaugural se denunciaron documentos en cabeza de la sociedad demandada, sino que, yendo más allá, a fuerza de perseguir un efecto útil –

probatoriamente hablando, se solicitó la EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, en tanto el legislador no contempló ninguna consecuencia por la no aportación de documentos denunciados, lo que sí hizo con el mecanismo de la exhibición, en caso de que se niegue sin fundamento legal a hacerlo.

Finalmente, se debió entonces, previo a impartir el segundo de los requerimientos, advertir su presencia en el listado de causales de inadmisión de la demanda en procura de salvaguardar los principios de taxatividad y reserva que en esa materia tiene decantado el legislador, y de igual manera, realizar una interpretación de la demanda, habida consideración que los documentos extrañados se manifestaron no estar en cabeza del demandante y por lo tanto se justificó la solicitud de exhibición.

TERCER REQUERIMIENTO - (1.3)

En esa misma línea, se precisa que la interpretación de la demanda, debe hacerse con un criterio jurídico y con todo respeto nuevamente, no mecánico, de modo racional, lógico y científico, amén de ceñido a la ley. De ahí que, dentro de un contexto de respeto por los derechos fundamentales a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, el examen del libelo se impone de manera integral, identificando la razón y naturaleza del derecho sustancial que se hace valer.

En ese sentido, el requerimiento impone el ajuste de las pretensiones de la demanda de tal manera que desaparezca la indebida acumulación, exigiendo que se guarde congruencia con los presupuestos de una acción de resolución del contrato (!!), cuando en verdad, y de ello es testigo el escrito inaugural, la acción procuró, en todo momento, OBTENER LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS BAJO EL ALERO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

De esta manera no se observa irregularidad en la formulación de las pretensiones, en la medida que siguieron las reglas del Artículo 88 del Código General del Proceso, al punto que se propusieron como **PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS**, aquellas pueden tramitarse por el mismo procedimiento, y el juez es competente para conocerlas y decidir las; de allí que no se observe irregularidades, en el requisito establecido en el **Numeral 2 del Artículo 88 del Código General del Proceso**, como así fue señalado con precisión por la Honorable Jueza al momento de posponer la calificación del libelo.

FRENTE AL DEBER DE INTEGRAR LA DEMANDA EN UN SOLO ESCRITO

Con todo respeto y cordialidad, manifiesto que no se aporta un escrito que altere el contenido de la demanda, debido a que no se modificó la voluntad objetiva del libelo con ocasión a las aclaraciones ofrecidas al Honorable Despacho.

SOLICITUDES PUNTUALES

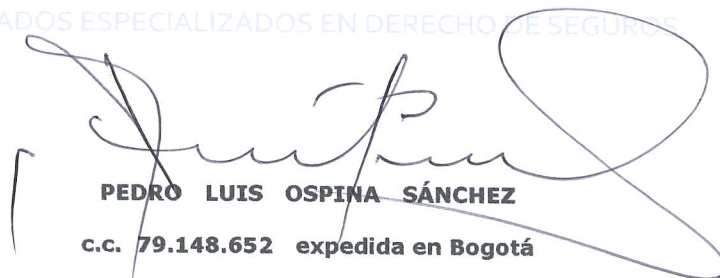
PRIMERA.- Teniendo en cuenta todo lo dicho en precedencia, ruego a su señoría tener por subsanada la demanda, y en su lugar proceder a **EMITIR SU CALIFICACIÓN.**

SEGUNDA.- Misma determinación que podrá adoptarse a través del empleo del mecanismo procesal del **CONTROL DE LEGALIDAD** de que da cuenta el **Artículo 132 del Código General del Proceso**; como quiera que los requerimientos impartidos no se compadecen con las taxativas causales previstas por el legislador, en la forma como fueron exigidas, o partieron de una indebida interpretación de la acción sustancial.

TERCERA.- De igual forma, en aplicación del aforismo, acogido por la jurisprudencia, *los autos ilegales no atan la voluntad del juez, ni resultan vinculantes para las partes*; bien puede abrirse la posibilidad de recoger lo decidido en este asunto; en procura de evitarle al demandante un desgaste mayor, al tener que acudir al recurso de apelación frente a la decisión que resuelva rechazar la demanda.

Con el fin que se entre con carácter urgente el expediente a su Honorable Despacho para calificar la demanda, con todo respeto y cordialidad le manifiesto a su señoría que, renuncio a los demás términos para la subsanación.

De la Honorable Jueza de la República de Colombia, con todo mi respeto y admiración,

Defender Asegurados S.A.S.
ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DE SEGUROS


PEDRO LUIS OSPINA SÁNCHEZ

c.c. 79.148.652 expedida en Bogotá

T.P. 151.378 del C.S. de la J.

pedroluisospina@outlook.com

notificacionesjudicialesdefenderasegurados@outlook.com

MÓVIL 310-2143315